

Por todo lo expuesto, mediante los fundamentos expresados y de conformidad con lo pedido por el C. promotor fiscal en el final de su escrito fecha 2 de Diciembre último, y sin aceptarlo en la parte que expresa igualdad en el sobroscimiento con la compurgacion del delito, fallo:

Se confirma la sentencia que pronunció el C. juez de Distrito de Morelia á 22 de Noviembre del año próximo pasado, y se dan por compurgados á Apolonio Alejandro, Luis Tovar, Ignacio Valdovinos y Eutiquio Ramirez, el delito de que se les hizo cargo, con sus padecimientos físicos y tiempo que han tenido de prision.

Notifíquese y ejécutese, librando la secretaría los recados que corresponden, y remítase esta causa á la Corte Suprema de Justicia para que sea revisada, y devuelta que sea y en caso de aprobacion por el superior, remítase al juzgado de su procedencia para que la prosiga contra Tiburcio Magaña lograda que sea su aprehension; y dígase al juez enunciado, cuide que los procesos esten bien organizados, sin omitir el parte de formacion de causa que se debe por ley, el discernimiento del cargo al defensor, y prevenir que las ratificaciones son de los testigos con citacion de los reos y no de estos entre sí, cuyas faltas se notan en el proceso.

El C. magistrado de Circuito así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo once de mil ochocientos setenta y dos.

Se ha por revisada esta causa respecto de los CC. Apolonio Alejandro, Luis Tovar, Ignacio Valdovinos y Eutiquio Ramirez; y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse al tribunal de Circuito de Querétaro archíandose á su

vez el toca. Se declara ademas, que queda subsistente para los efectos legales, el auto pronunciado por ese tribunal de Circuito el veintitres de Enero último en la parte que previene la prosecucion de la causa contra Tiburcio Magaña y en lo relativo á lo que dispone respecto de las advertencias que manda hacer al juzgado de Distrito de Michoacan.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M^a Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Marzo treinta de mil ochocientos setenta y dos.—*Alejo Gomez Eguiarte,* oficial 2º y archivero.

COMPETENCIA.

Promovida por el C. juez de 1ª instancia de Jiquilpan, en el estado de Michoacan á la 3ª sala del tribunal superior del Distrito, para conocer del juicio que D. Francisco de Asis Ruiz pagaciones que el primero deduce, como resultado del contrato de arrendamiento de las haciendas San Antonio y Huaracha.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El fiscal dice: que de los autos que se tienen á la vista consta: que en el año de 1859, la compañía «Ruiz y Erdozain,» celebraron con la testamentaria de D. Diego Moreno, un contrato de arrendamiento, que debia durar nueve años, de las haciendas de San Antonio y la Huaracha; quedando exclusivamente en propiedad de ese arrendamiento el Sr. Ruiz, por convenio que entre sí se celebraron los socios. Que vencido el plazo, el Sr. Ruiz por una parte, y el Sr. Moreno D. Ignacio por sí y en representacion de sus hermanos, en calidad de dueños de las relacionadas fincas, otorgaron una escritura, con fecha 29 de Julio de 1868, y en la cual estipularon los tér-

minos y manera en que el Sr. Ruiz devolvería las haciendas arrendadas. Entre las cosas convenidas, fué una de ellas, (cláusula segunda), que en caso de suscitarse algunas diferencias al tiempo de la entrega, sobre liquidacion, pago de contribuciones, cuenta presentada por el Sr. Ruiz, y en fin cualquiera disputa, se sujetarian para su decision al fallo de un árbitro, que lo seria el Sr. D. Miguel Rul, y en su defecto lo remplazaría el Sr. D. Carlos Lambley. El caso previsto por los contrayentes llegó á realizarse, y ocurrieron al árbitro D. Miguel Rul, iniciando ante él un juicio. Mas este señor faltó, ausentándose de esta capital y renunciando el cargo.

Entonces el Sr. Ruiz, creyó oportuno presentarse al juez 3º de lo civil de México, pidiéndole, que radicando ante sí el juicio pendiente, previniera al Sr. Lic. D. Emilio Pardo devolviera los autos relativos que tenía en su poder, como apoderado de los Sres. Moreno; á fin de que se continuaran segun su estado. De éste escrito se corrió traslado á la parte de Moreno, la que lo contestó diciendo sustancialmente: que no obstante que habia un compromiso solemne de ventilar ante un árbitro las cuestiones que surgieran con motivo de la entrega de las haciendas de «San Antonio» y la «Huaracha», y que en caso de faltar el Sr. Rul en este encargo, debia sustituirlo el Sr. Lambley; los Moreno, aceptaban la rescision del compromiso de arbitraje, pretendida por la parte del Sr. Ruiz; pero sin hacer lo mismo respecto del punto de radicacion; pues por el contrario protestaban contra ella, declinaban la jurisdiccion del C. juez que los emplazaba, y manifestaban expresamente que en manera alguna su respuesta envuelve una próroga de jurisdiccion, fojas 4, cuaderno 2º Repitiendo esta protesta cada vez que presentaban algun escrito al referido juez 3º.

Mientras esta cuestion se ventilaba en dicho juzgado, los señores Moreno, ocurrieron al juez de Jiquilpan, en el Estado de

Michoacan, exitándolo á que reclamara del de México el conocimiento de este negocio, y á ser necesario le promoviera la respectiva competencia, fundándose en que, no subsistiendo ya el compromiso en árbitros, por mútuo consentimiento de las partes, y radicados y domiciliados los señores Moreno en el partido general de Jiquilpan, ante esta autoridad debian ser reconvenidos por el Sr. D. Francisco Ruiz.

El juez encontro fundadas las razones expuestas por la parte de Moreno, y remitió al juez de México el oficio inhibitorio de estilo. Pero como al recibirse en esta capital esa comunicacion, los autos habian subido al tribunal superior, para conocer de la apelacion que Moreno interpuso de la sentencia en que el juez 3º declaró que el juicio pendiente debia seguir ante árbitros, previniendo á los litigantes nombrasen otros con total arreglo á la escritura de compromiso de 29 de Julio de 1868; apelacion que se interpuso con la protesta de costumbre, de no prorogar jurisdiccion, fué remitida al tribunal superior el cual la devolvió por no venir dirigida á él.

Entonces el juez de Jiquilpan, repitió la inhibitoria, dirigiéndola directamente á la 3ª sala del tribunal referido, que era la que conocia de la apelacion interpuesta. En ella le reclama el conocimiento de este asunto; y como los fundamentos alegados por la autoridad de Jiquilpan no convencieron á su competidor de la justicia de su pretension, ambos tribunales han elevado sus respectivas actuaciones á esta respetable sala, para que se sirva decidir la competencia que se ha suscitado entre ellas.

Estos son los hechos comprobados en autos: en vista de ellos el que suscribe formulará su pedimento fiscal. Pero antes quiere como de paso, fijar un punto en que parece se apoya tambien el tribunal superior, para defender su jurisdiccion. Parece que este tribunal, sostiene que la competencia entre él y el juez Jiquilpan, no es admisible, por que siendo el juez de Jiquil-

pan, un juez de 1ª instancia, y su competidor un tribunal de alzada; no hay igualdad de categoria; sino una escala de inferior á superior, y por lo mismo, entre ambos, no cabe disputa jurisdiccional. Si esta competencia versara única y exclusivamente sobre conocer del punto apelado, y el juez que la promoviera fuera el de México, podría sostenerse semejante especie; pero tratándose de la cuestion principal, y disputando su conocimiento un tribunal de distinta jurisdiccion de la del tribunal superior, no es posible comprender como se haya alegado esa razon. Cuando se suscita una controversia entre autoridades judiciales de distintos Estados, no debemos fijarnos en el grado que cada una de ellas tenga en las diversas instancias de un juicio; sino solamente en su entidad ó representacion moral ante la Constitucion. Cada una de ellas representa en si misma un tribunal absolutamente distinto de la otra, y por lo mismo no hay relacion alguna de superioridad ó inferioridad, y por identidad de razon formando realmente tribunales de diversos Estados en los conflictos jurisdiccionales, que entre ellos tengan lugar, entra de lleno la aplicacion del artículo 99 de la Constitucion general de la República. Esto es en cuanto á la filosofia del derecho, por que en la práctica las competencias entre un juez de 1ª instancia y un tribunal superior, es un hecho comprobado por repetidos casos que han ocurrido en esta Suprema Corte.

Pero volviendo á la cuestion principal fijémonos en el juicio arbitral. Este de hecho quedó insubsistente é ineficaz, por el mismo consentimiento de las partes, y como ese juicio sea tan particular, por que es una excepcion del principio general que sujeta á la jurisdiccion del juez ordinario el conocimiento de todos los negocios civiles y criminales que se susciten dentro de su territorio, se sigue que sus efectos no pueden estenderse á mas de lo que estrictamente abraza la escritura de compromiso;

y por lo mismo no puede decirse en el presente caso, que el lugar del contrato ha determinado la jurisdiccion del juez de México, con preferencia al juez del domicilio; tanto mas, cuanto que en la escritura de arrendamiento, los contrayentes pactaron solemnemente dejar á salvo la jurisdiccion de las autoridades que de sus causas y negocios debieran conocer segun derecho. No siendo de presumir que al alegarse el fuero del contrato, se haga referencia al convenio en virtud del cual los Sres. Moreno y Ruiz se obligaron á sujetarse á un juicio arbitral; pero si así fuere, ese pacto quedó enteramente roto por mútuo consentimiento de las partes, y cuando el juicio estaba tan informe que ni siquiera se habia decidido la manera en que se debia proceder, (fojas 41, cuaderno primero) y así no ha producido, ni puede producir efecto alguno, ni mucho menos uno tan importante como lo es la próroga de jurisdiccion, ó renuncia del propio fuero.

Tampoco puede decirse como asegura el Tribunal Superior en su informe, que los Sres. Moreno se obligaran á seguir en México el juicio que les promoviera el Sr. Ruiz; por el contrario, no se encuentra uno solo de sus escritos presentados al juez de ésta capital, ni ninguna notificacion de importancia que se les hiciera, que no contenga la mas formal protesta de no prórogar jurisdiccion, y por lo mismo tampoco puede decirse que hayan prórogado la del juez de México. Se dice en ese mismo informe que el Sr. Moreno, se hallaba en esta capital al iniciarse el pleito: esto es cierto; pero con una distincion muy importante. ¿El Sr. Moreno se hallaba presente en México al tiempo de iniciarse el juicio arbitral? esto es exacto; ¿pero lo estaba al tiempo en que el Sr. Ruiz se presentó al C. juez 3º pidiéndole radicaré ante él los autos seguidos ante el arbitro D. Miguel Ruiz? de ningún modo, y por esto es, que á nombre de los Sres. Moreno, contestó el Sr. Lic. D. Emilio Pardo, y ya se deja dicho que en

esa contestacion se interpuso desde luego una declinatoria de jurisdiccion.

Así, pues, demostrado como queda que el fuero del contrato no debe subsistir, ya se considere el contrato de arrendamiento; yá el de arbitraje; que tampoco ha habido próroga de jurisdiccion; no queda mas como causa para surtir fuero en el litigio á que estas actuaciones se contraen, que el que produce el domicilio, y el cual desde un principio han invocado y llamado en su defensa los Sres. Moreno, y al que es de atenderse, primero; por que el juez de Jiquilpan, asegura que en efecto allí están domiciliados; segundo; por que la parte contraria no lo contradice; tercero: ser de pública notoriedad que la familia Moreno, comprometida en este negocio, no está en la actualidad radicada en México; cuarto; que la excepcion de declinatoria se interpuso en tiempo y se ha sostenido siempre, y si pues, es de atenderse, para la desicion de esta competencia al fuero que produce el domicilio; entonces, con arreglo á las leyes 4º título 3º y 32 título 2º ambas de la Partida 3ª y á la 21, título 5º libro 2º de la Recopilacion y de conformidad con la doctrina general de todos los tratadistas de derecho, que enseñan que el fuero del domicilio es el mas preferente, ya se le concede solo, ó en concurrencia con los demas que reconocen las leyes, es de confirmarse la jurisdiccion del juez de Jiquilpan en este negocio.

Así lo entiende el suscrito, y por lo mismo concluye, con las siguientes proposiciones, que desde luego sujeta á la aprobacion de esa respetable sala.

Primera; Se declara que el C. juez del Partido judicial de Jiquilpan, Estado de Michoacan, es competente para conocer del juicio que D. Francisco de Asis Ruiz ha promovido al Sr. D. Ignacio Moreno y hermanos sobre cumplimiento de las obligaciones que el primero deduce, como resultado del contrato de arrendamiento de las haciendas "S. Antonio" y "Huaracha".

Segunda: Devuélvase las actuaciones con copia certificada de la sentencia, al Juez de Jiquilpan, para los efectos consiguientes; remítase copia igual al Tribunal Superior del Distrito, para su conocimiento, haciendose saber, y archívese á su vez el toca.

México, Enero veintisiete de mil ochocientos setenta y dos.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo veinte de mil ochocientos setenta y dos.

Vista la competencia promovida por el C. juez de 1ª instancia de Jiquilpan, en el Estado de Michoacan, á la 3ª sala del tribunal superior del Distrito, con motivo de haber ausentado de esta ciudad de México, uno de los arbitrios y renunciando el cargo el otro de ellos, nombrados para conocer de las diferencias relativas á la entrega de las haciendas la "Huaracha" y anexas suscitadas contra Don Francisco A. Ruiz y Don Diego Moreno hermanos: lo expuesto en apoyo de la respectiva jurisdiccion por las partes y por las autoridades que competen: con lo pedido ante esta 1ª sala por el C. fiscal; y oído lo alegado ante esta 1ª sala por el C. fiscal; y oído lo alegado ante la misma, al tiempo de la vista por los CC. Licenciados Pedro Collantes y Buenrostro, en favor de la jurisdiccion del juez de Jiquilpan, y Rafael Dondé en favor de la 3ª sala del tribunal superior del Distrito;

Considerando: que la competencia promovida no versa sobre el conocimiento de las reclamaciones suscitadas entre Ruiz y Moreno hermanos por la entrega de las haciendas la Huaracha y anexas, respecto de lo cual no tiene por lo mismo nada que resolver la Corte Suprema, sino que versa únicamente sobre si esas diferencias han de continuar sujetándose á juicio de árbitros;

que el compromiso para que se sujetasen á árbitros fué reducido á escritura pública en esta ciudad de México, y que en la escritura se expresa que las personas que contrajeron el compromiso son residentes en México: que en autos consta que Don Diego Moreno hermanos nombraron apoderado en esta ciudad para que los representase en el juicio de árbitros, todo lo que demuestra que el domicilio de los contratantes ha estado en la misma ciudad; y

Considerando por último, que el fuero del domicilio es preferible á lo demás; con arreglo á lo dispuesto en la ley 22 tit. 2º partida 3ª se declara.

Primero; que los tribunales de Distrito federal son competentes para conocer de la cuestion actualmente suscitada ante ellos sobre la subsistencia del compromiso en árbitros.

Segundo: no hay condenacion de costas;

Tercero, Remítanse las actuaciones á la 3ª sala del tribunal superior del Distrito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, remitiéndose copia igual al juez de Distrito de Jiquilpan; hágase saber y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron,—*S. Lerdo de Tejada*,—*Pedro Ogazon*.—*J. M. Lafragua*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. Auza*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril nueve de mil ochocientos setenta y dos.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial 2º

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de Distrito del Estado de México contra Don José María Meana y Don Atanacio Ferado por peculado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL
DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. José M. Alva, visitador de la administracion principal de correos de esta ciudad, con fecha de Junio del año anterior de 1870 participa al juzgado, que al presentarse en la oficina de los correos con el objeto de cumplir su comision, no se presentó en la administracion el Sr. D. José M. Meana, y en su ausencia procedió á practicar el corte de caja extraordinario, preliminar de la visita, en los términos prevenidos en el reglamento, dando por resultado la falta de dinero en la caja, de mil setecientos diez y seis pesos y ocho centavos que debian de existir en numerario, segun los libros de la administracion.

En la misma fecha se inició el proceso; y á los dos dias, el ministro ejecutor del juzgado presentó al Sr. Meana, y fué interrogado conforme á los datos de su consignacion.

En su inquisitiva declaró: que estaba conforme con la diferencia del corte de caja que habia formado la visita, y que la cantidad que faltaba la habia tomado en diversas partidas para subvenir á sus necesidades, con la esperaza provable de reponerlas.

El juzgado, en vista de tales anteceden-tes, lo declaró formalmente preso, consignándolo al hospital de San Juan de Dios por que se manifestó que estaba enfermo.

Con fecha 28 del mismo mes de Junio se amplió su preparatoria al expresado Meana para que manifestara si habia hecho renuncia del empleo de administrador de la